

ochenta y ocho y noventa y dos, propiedad del señor Luengo Chillón y sita en el término municipal de Granadilla de Abona, expropiadas con motivo de la construcción del aeropuerto sur de Tenerife, y, en su consecuencia, elevamos el justiprecio total de las tres fincas, incluido el suelo, edificaciones, plantaciones y premio de afección, a la suma de cinco millones doscientas veintiuna mil ciento sesenta y dos pesetas con sesenta y cuatro céntimos, que deberá abonar la Administración al expropiado, y además el interés legal de dicha suma a partir del día veintiuno de octubre de mil novecientos setenta y dos y hasta el completo pago. Anulamos, por contrarios a derecho, los actos administrativos ocurridos y revocamos la sentencia apelada en cuanto contradigan lo resuelto en la presente.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el "Boletín Oficial del Estado" e insertará en la "Colección Legislativa", lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios términos la referida sentencia, publicándose el aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado»; todo ello en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 («Boletín Oficial del Estado» número 363).

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos consiguientes.

Dios guarde a V. I.

Madrid, 6 de febrero de 1978.—P. D., el Subsecretario, Ignacio Bayón Marín.

Ilmo. Sr. Subsecretario de Aviación Civil.

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

5323

ORDEN de 2 de diciembre de 1977 por la que se dispone se dé cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de Valladolid en el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra este Departamento por «Central Lechera de Salamanca» (LEDESA).

Ilmo. Sr.: Habiendo recaído resolución firme de la Audiencia Territorial de Valladolid, con fecha 23 de septiembre de 1977, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra este Departamento por «Central Lechera de Salamanca» (LEDESA).

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla la citada sentencia en sus propios términos, cuyo fallo dice lo que sigue:

«Fallamos: Que desestimando la pretensión deducida por el Procurador don José María Ballesteros Blázquez, en nombre y representación de "Central Lechera de Salamanca" (LEDESA), contra la Administración General del Estado, declaramos que la resolución de la Dirección General de Ordenación y Asistencia Sanitaria de la Seguridad Social de fecha once de septiembre de mil novecientos setenta y seis que desestimó el recurso de alzada interpuesto contra acuerdo de la Delegación Provincial de Trabajo de Salamanca de fecha dos de febrero de mil novecientos setenta y seis, que impuso a la Entidad recurrente multa de 1.500 pesetas por falta de afiliación de productores a la Seguridad Social, es ajustada a Ordenamiento Jurídico. Sin hacer especial condena en cuanto a las costas de este proceso.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos, Manuel de la Cruz, Nicolás Martín, Marcos Sacristán. Rubricado.»

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V. I.

Madrid, 2 de diciembre de 1977.—P. D., el Subsecretario, Victoriano Anguera Sansó.

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento.

5324

ORDEN de 2 de diciembre de 1977 por la que se dispone se dé cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de Valladolid en el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra este Departamento por «Central Lechera de Salamanca» (LEDESA).

Ilmo. Sr.: Habiendo recaído resolución firme de la Audiencia Territorial de Valladolid con fecha 23 de septiembre de 1977 en el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra este Departamento por «Central Lechera de Salamanca» (LEDESA),

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla la citada sentencia en sus propios términos, cuyo fallo dice lo que sigue:

«Fallamos: Que desestimando la pretensión deducida por el Procurador don José María Ballesteros Blázquez, en nombre y representación de "Central Lechera de Salamanca" (LEDESA), contra la Administración General del Estado, declaramos que la Resolución de la Dirección General de Ordenación y Asistencia Sanitaria de la Seguridad Social de fecha 11 de septiembre de 1976 que desestimó el recurso de alzada interpuesto contra acuerdo de la Delegación Provincial de Trabajo de Salamanca de fecha 2 de febrero de 1976, que impuso a la Entidad recurrente multa de 1.500 pesetas por falta de afiliación de productores a la Seguridad Social, es ajustada al ordenamiento jurídico; sin hacer especial condena en las costas de este proceso.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—Manuel de la Cruz.—Nicolás Martín.—Marcos Sacristán.»

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V. I.

Madrid, 2 de diciembre de 1977.—P. D., el Subsecretario, Victoriano Anguera Sansó.

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento.

5325

ORDEN de 2 de enero de 1978 por la que se dispone se dé cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de Granada en el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra este Departamento por don Crisanto Porcel Gámez y don Antonio Romacho Lain.

Ilmo. Sr.: Habiendo recaído resolución firme de la Audiencia Territorial de Granada, con fecha 11 de noviembre de 1977, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra este Departamento por don Crisanto Porcel Gámez y don Antonio Romacho Lain,

Este Ministerio, ha tenido a bien disponer se cumpla la citada sentencia en sus propios términos, cuyo fallo dice lo que sigue:

«Fallamos: Que debemos estimar y estimamos el recurso interpuesto por don Crisanto Porcel Gámez y don Antonio Romacho Lain contra Resolución de la Dirección General de la Seguridad Social de dieciséis de diciembre de mil novecientos setenta y cinco, recaído en expediente noventa y uno/setenta y cuatro, confirmatorio de la dictada por la Delegación Provincial de Trabajo de Granada de veintidós de diciembre de mil novecientos setenta y tres, anulando dichos actos por ser contrarios a derecho, como asimismo el acto de liquidación de cuotas del Régimen General de la Seguridad Social de ocho de octubre de mil novecientos setenta y tres, que les sirve de antecedente; sin expresa imposición de costas a ninguna de las partes.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—Miguel Ángel Ortí Alcántara.—José Sánchez Feba, Ramón Trillo Torres (rubricados).»

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V. I.

Madrid, 2 de enero de 1978.—P. D., el Subsecretario, Victoriano Anguera Sansó.

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento.

5326

ORDEN de 4 de enero de 1978 por la que se dispone se dé cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra este Departamento por «González y Díez, S. L.».

Ilmo. Sr.: Habiendo recaído resolución firme del Tribunal Supremo con fecha 5 de octubre de 1976, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra este Departamento por «González y Díez, S. L.».

Este Ministerio, ha tenido a bien disponer se cumpla la citada sentencia en sus propios términos, cuyo fallo dice lo que sigue:

«Fallamos: Que estimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por "González y Díez, S. L.", contra la Resolución de la Dirección General de Previsión de veinticuatro de junio de mil novecientos sesenta y nueve, que confirmó resolución de la Delegación Provincial de Oviedo de treinta de diciembre de mil novecientos sesenta y ocho, resoluciones que por no estar ajustadas a derecho anulamos, al igual que el acta de inspección y liquidación, con las consecuencias de liberación del aval bancario prestado; sin una condena en costas.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el "Boletín Oficial del Estado" e insertará en la "Colección Legis-